

25. ¿LA SOCIEDAD QUE SE ORGANIZA?

Debemos abrir ahora un paréntesis referente a los conceptos: si bien la referencia al desorden es central para la comprensión de México en este fin de siglo, con ello se está intentando una caracterización de la sociedad en su conjunto, en su funcionamiento "normal", y no en sus momentos de ruptura y en sus sobresaltos, que son naturales en todo orden social. En efecto, los movimientos o luchas sociales constituyen por su naturaleza reordenamientos instantáneos del escenario colectivo desde el momento en que establecen una identidad de los alzados, definen un adversario contra quien orientar su acción y montan una trama y unas demandas. Aunque la ruptura sea pasajera conlleva inevitablemente esa fuerza reordenadora, de manera que cuando se estudia lo social a través de sus conmociones, el método nos empuja inevitablemente a resaltar los fenómenos identitarios y hace perder de vista lo que en ocasiones denota con más fuerza el estado de un colectivo en su cotidianidad "normal": la debilidad, la atomización, la incultura y, en el extremo, la anomia.

Así, por ejemplo, nuestros argumentos no están necesariamente en contradicción con el espíritu de un ensayo de Carlos Monsiváis que se titula *Una sociedad que se organiza*¹ en el que el autor se interesa por analizar el ascenso de algunas de las principales luchas sociales durante la década pasada: las organizaciones, identidades y solidaridades generadas a partir del terremoto de 1985 en la capital del país; la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI) en Juchitán, Oaxaca; el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), en la UNAM, etc. Es lo propio de las luchas sociales y de las situaciones extraordinarias definir un oponente, luchar en contra de él y en favor de unos objetivos que cohesionan la identidad colectiva así generada y dar la impresión, en consecuencia, de una gran organización. Es lo propio también de cualquier sociedad estar viendo surgir estas situaciones aquí y allá. Pero la imagen de tales acontecimientos no debe llevarnos a caracterizar a la

¹ *Entrada libre. Crónicas de una sociedad que se organiza*, México, ERA, 1987.

sociedad global-normal con los mismos parámetros que a las situaciones de excepción en que se desarrollan las luchas sociales. Es más, de las luchas aludidas por Monsiváis, poco o nada quedó del movimiento universitario (estudiantes y académicos), a partir de 1988 cuando el CEU tuvo que optar por la "acumulación de fuerzas" con el cardenismo y algo no tan diferente ha acontecido con las organizaciones heredadas del terremoto, que también se vieron sobrepolitizadas y sufrieron escisiones producto de las luchas electorales en 1988 y en 1994 (aunque no al extremo de ver desmantelada su estructura organizativa). Aceptemos sin embargo que algunas organizaciones se alejan de este vaciamiento crónico de lo social mexicano: la COCEI de los juchitecos que desde Cosijopi, antes de la colonia, peleaba contra el vértice azteca y que hoy, a pesar de su involucramiento con el Pronasol, no ha visto debilitada su identidad regional; los sinarquistas, que desde la "Cristiada" se han peleado con el Estado central, destructor obsesivo de los pequeños propietarios agrarios, a lo que el navismo potosino no ha sido ajeno, etcétera.

Así, las organizaciones nacidas a raíz del terremoto de 1985, la Asamblea de Barrios, el CEU y el propio 88 cardenista, con su extremada "visibilidad capitalina" (el regente Camacho recibiendo los jtomatazos del enmascarado Superbarrio en pleno Zócalo del país), generaron una apariencia de gran participación en el resto del escenario nacional, una cortina de humo en realidad que nos impidió calibrar el desmantelamiento de los actores colectivos en nuestro país.

Hay pues una diferencia entre la activación en el corto plazo (su enorme potencialidad para definir a un adversario y a una identidad que aparece tan poderosa en su momento de activación coyuntural) y lo que hemos llamado el comportamiento social-normal de una sociedad.

Sea como fuere, tenemos que responder a otra "salvedad", porque lo que ha caracterizado a México desde 1994 no ha sido el desorden anómico y el desmantelamiento de los actores sociales sino la aparición de un actor colectivo bastante bien definido en el sureste que parece haber conmovido al país mucho más radicalmente que la lista de conflictos antes referida.

26. EL LEVANTAMIENTO ZAPATISTA

Ante el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional políticos, intelectuales, periodistas y ciudadanos hemos expresado: 1] sorpresa-incrédula; 2] condena a la violencia; 3] conmiseración por los pobres, y 4] titubeo entre considerarlo un conflicto local o el lugar mal vigilado por el que se "coló" el malestar de esa enorme mayoría de los mexicanos convencidos de que su papel en el proyecto neoliberal nunca dejará de ser el sacrificio y la espera.

El patrón según el cual funcionamos los mexicanos cuando se rompe el orden nos enseña que es ridículo separar lo local de lo nacional; por más que la situación de los indios de Chiapas sea diferente a la de los mexicanos del norte, ello no anula el que una de nuestras soleras de comportamiento continúe siendo *la cargada*, la acumulación de fuerzas, que igual funciona para robustecer al tlatoani que para derrocar al gobierno: las clases ilustradas de San Luis Potosí, las gavillas del norte y los peones acasillados del sur se aliaron como un rayo contra el Estado central al inicio de la Revolución de 1910. Inmediatamente después del levantamiento de los zapatistas de Chiapas, las organizaciones indígenas y campesinas tomaron 50 mil hectáreas sobre las que no se ha podido encontrar una solución y reconocieron al EZLN como fuerza beligerante. Estos serios peligros para la estabilidad nacional se dieron en medio de un escenario que, desde 1988, había sido alimentado por la imposición de los gobernantes vía el fraude electoral en Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí y últimamente en Tabasco, Yucatán y el propio Chiapas (sin dejar de lado la elección presidencial). No olvidemos tampoco que en los meses recientes se pueden constatar en el ambiente social muchas manifestaciones derivadas de esa otra solera del comportamiento de los mexicanos cuando se rompe el orden o se adivina su debilitamiento: *la revuelta plebeya*, que comienza naturalmente con la sorna, la fiesta callejera (el festival de rock en el escenario actual), la desobediencia, el reto, y se amplifica hacia la violencia desorganizada, los linchamientos y la destrucción pura y simple.

En nuestra sociedad no es la semejanza en la identidad de los

alzados lo que los mantiene juntos sino el compartir un mismo adversario: cuestionado éste todo pasa a ser desorden. El principio unificador de nuestra sociedad es, por extensión, estatal y no social; producto del no haber podido construir actores sociales con cierto poder, intermedios entre el Estado y los ciudadanos dispersos o las masas. Nuestras clases sociales altas, ya lo veíamos, pero también las obreras y las intermedias, han sido siempre barridas por la revuelta, la guerra, los capitales exteriores, pero sobre todo por el pavor estatal y de toda nuestra cultura a convivir con el otro y a respetarlo. Por ello seguimos siendo caldo de cultivo para los levantamientos generalizados en contra del adversario estatal compartido (sobre todo cuando da visos de antinacionalismo). No vale argumentar que eso quedó en nuestro pasado campesino: primero, porque lo que está ante nuestros ojos proviene justamente de ese pasado; segundo, porque a diario vemos el espectáculo de otras sociedades que parecían mucho más cerca de Occidente, como Yugoslavia, y cuyo principio de orden quedó hecho trizas; pero, fundamentalmente, porque nuestra modernización salvaje ha demostrado ser una destructora inclemente de nuestra modernidad inacabada, de lo que más nos asemejaba a un país moderno que no es la posesión de un teléfono celular, una videograbadora y una "personal computer" para el 1% de los mexicanos integrados, sino la presencia de un empresariado medio robusto (hoy hecho jirones por la apertura comercial, la crisis y la recesión); de grupos de trabajadores con cierta capacidad de negociación; de un campesinado con alguna organización para influir en los ritmos de la apertura comercial, los subsidios y las leyes que lo conciernen (como el campesinado francés); de un sistema informativo y de opinión con autonomía frente al Estado; y de un sistema electoral con, por lo menos, alguna credibilidad. En una entrevista anterior al primero de enero de 1994 se le preguntaba al encabezado de Gobernación si lo que estaba haciendo el régimen neoliberal no era la destrucción deliberada y sistemática de todos los espacios de intermediación, incluido el balcanizado sistema partidista, y si eso no contradecía la sabia frase de don Jesús Reyes Heróles en el sentido de que "lo que resiste apoya" (en donde él daba a entender que espacios alternativos de crítica, de identidad colectiva y de oposición son apoyo indispensable de cualquier orden político sano); que si todo aquello, se le cuestionaba, no hundía en una especie de fango a las bases del Estado. El secretario contestó que

el desdibujamiento de las intermediaciones del pasado (sindicatos, organizaciones campesinas, universidades, sistema educativo, mediaciones partidistas...), estaba siendo sustituido por formas más modernas, y puso como ejemplo a las Organizaciones No Gubernamentales y a los Comités de Solidaridad. Ya no dio tiempo para replicar que éstos eran organismos demasiado atomizados, discontinuos y pequeños en lo profundo de la organización social y que difícilmente llenarían el hueco enorme que se había generado entre ellos y el vértice...

Quizás por esto surgió en Chiapas la ruptura: el régimen, acostumbrado a gobernar con base en el control extremo de los medios de comunicación y la destrucción sistemática de los espacios, actores y organismos de identidad colectiva, se distrajo en esa tarea desmanteladora: dio por sentado que las regiones del campesinado paupérrimo, predominantemente indígenas, se encargarían de su propia demolición agobiadas por el alcoholismo, los cismas religiosos, el caciquismo con sus guardias blancas y la represión militar periódica. Olvidó que comunidades que mantienen estructuras de cohesión fuertemente ancladas en valores culturales y religiosos ancestrales —el México "profundo"— antes de aceptar su dislocación definitiva recurren a los fundamentos y los defienden de manera radical, es decir, con la vida. Así se explica, hoy, el vigoroso resurgimiento del fundamentalismo islámico, nos atrevemos a argumentar.

De acuerdo con esto y dentro de la matriz de funcionamiento de la acción sociopolítica mexicana, la ruptura que estamos viviendo parece ser inminentemente nacional y no sólo local. ¿Quién iba a imaginar que el México profundo estaría, a inicios de 1994, activando al México roto (los desechos de la modernización salvaje), despertando al México bronco (plebeyo), y amenazando con triturar al México ciudadano, el de los integrados a la modernización, el de los hijos "triumfantes" del libre comercio y el anunciado tránsito a la democracia?

El escenario chiapaneco durante el año de 1994, si hacemos abstracción hasta cierto punto de las elecciones nacionales y estatales, se planteó de la siguiente manera:

1] El gobierno resumió su postura en el punto 8 del documento "Compromisos para una paz digna en Chiapas" (presentado en marzo a los zapatistas por Manuel Camacho, representante del presidente Salinas para los diálogos de paz en la catedral de San Cris-

tóbal), en donde aceptaba que existían unas demandas justas por parte del EZLN pero que se trataba de asuntos locales, circunscritos a la cuestión indígena, y proponía solucionar esos "graves problemas agrarios" promulgando una *Ley General de las Comunidades Indígenas* que permitiera no tocar en lo absoluto las reformas hechas durante ese sexenio al artículo 27 constitucional (en las que se declara concluido el reparto agrario y se convierte a la figura del ejido en un bien mercantil enajenable dando paso a la acumulación legítima de la tierra). El EZLN por su parte se retiró a la selva para realizar una consulta en torno a los "Compromisos para una paz digna", y regresó a la visibilidad pública hacia mediados de 1994 con un *NO* rotundo a las 32 propuestas gubernamentales. Junto con esto se destinaron enormes cantidades de dinero, vía Pronasol, con vistas a apuntalar lo mejor posible la cuestionada estructura de las representaciones políticas (dar alguna legitimidad a las tan repudiadas presidencias municipales). El objetivo fue la reconstrucción desesperada de un sistema de dominación con base en *a*] las clases poseedoras existentes, que incluso estuvieron recibiendo una renta del gobierno mientras sus tierras fueran ocupadas, *b*] la estructura de las instituciones políticas tal como existe hasta ahora (presidencias municipales con dinero de Pronasol), y *c*] las organizaciones sociales campesinas y las llamadas organizaciones productivistas (en especial la ARIC-Unión de Uniones), que han intentado durante más de un decenio modernizar la agricultura de la región, con base en la producción cafetalera, enganchándola al mercado internacional (proyecto debilitado en los primeros años noventa por la caída mundial de los precios del café);

2] El EZLN también compitió naturalmente por inclinar a su favor las fuerzas que se encontraban en su entorno y lo logró hasta cierto punto: primeramente creó las condiciones que hicieron posible la invasión de 50 mil hectáreas, una buena parte en territorios no controlados militarmente por el zapatismo; segundo, tuvo la influencia suficiente para evitar que la Coordinadora Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC), convocada e impulsada desde el inicio del conflicto por los representantes del presidente de la República (la CEOIC contó desde enero de 1994 con más de doscientas organizaciones), fuera controlada por las corrientes oficiales (como la CNC y la ARIC-Unión de Uniones). Digamos de pasada que parece cierta la tesis según la cual las organizaciones oficiales campesinas fueron perdiendo sus bases, sobre todo las más

jóvenes, en favor de las corrientes que se plantearon la vía armada. El hecho es que cada vez con más fuerza, las organizaciones campesinas e indígenas se declararon en favor del zapatismo, y no como simpatizantes sino exigiendo el reconocimiento del EZLN como fuerza beligerante, lo que las deslindó del intento de manipulación oficialista.

En Chiapas -nos dice Neil Harvey en un excelente artículo-, el impacto real de las reformas al 27 no se expresaba en la compra masiva de las tierras, ni en una creciente asociación entre ejidatarios e inversionistas, sino en la cancelación del derecho al reparto agrario. En la selva lacandona el rezago era muy marcado. Muchos campesinos sólo tenían títulos precarios, lo que les impedía conseguir créditos y otros insumos. Entre otros factores, esta falta de seguridad contribuyó a la radicalización de muchos miembros de la ARIC Unión de Uniones, que empezaron a ver una alternativa en el EZLN. En 1991-1992, la ARIC hasta ofreció pagar por las tierras que estaban solicitando pero ni así se pudo avanzar debido a la colusión entre funcionarios y terratenientes. Esta situación prevalecía en las cañadas de Patihuitz, Avellanal y La Estrella, zonas en donde el EZLN ganó mucho apoyo. Al mismo tiempo, la cancelación del reparto agrario significa la cancelación del último recurso de trabajo para muchos campesinos...¹

¹ Neil Harvey, *op. cit.* "El EZLN -continúa Harvey- sacó a la luz pública la compleja problemática agraria en Chiapas. En el momento de las reformas al 27 constitucional existía en Chiapas un rezago de solicitudes no resueltas que representaban 3 483 expedientes de tierras y 164 resoluciones presidenciales. Este rezago representaba el 27 por ciento del total nacional. Sin embargo, según las cifras oficiales, hasta el 21 de junio de 1994 se había resuelto el 94% de este rezago en Chiapas (*La Jornada*, 14 de julio de 1994). El 46% de los expedientes recibieron fallos positivos, mientras el 53.5% fueron rechazados por falta de fincas afectables y por otras causas de improcedimiento... En los primeros cinco meses de 1994 los grupos que recibieron fallos negativos volvieron a presentar 249 nuevas solicitudes. Pero estas demandas fueron planteadas ahora en un contexto muy distinto al que prevalecía en 1992 y 1993."

Es evidente que para enderezar las abismales injusticias económicas y sociales, en un estado fundamentalmente agrario, con una clase dominante finquera y ganadera, hay que ir al tema de la reasignación de la tierra. La cuestión no es sólo que algunas propiedades sean auténticos latifundios, sino que todas contrastan con la posesión extrema de los indios. En Chiapas el problema de la tenencia de la tierra no es tanto de ilegalidad como de injusticia, y los grandes y medianos propietarios, por más que estén dentro de la ley, no pueden vivir tranquilos con un cerco de comunidades indias oprimidas.

Casi el 30% del rezago agrario nacional se sigue concentrando en Chiapas. Poco más de 100 personas poseen el 12% de las tierras. En la entidad dominan finqueros y los grandes propietarios ganaderos, no más de 6 mil familias que detentan más de 3 millones de hectáreas —prácticamente la mitad de la superficie con la que cuenta el conjunto de la sociedad rural. Salvo escasas excepciones, la mayoría de estos finqueros han basado la obtención de sus ganancias en la sobreexplotación del trabajo rural y en métodos o formas extensivos —y de depredación— de cultivo. Y más allá del conflicto directo por la tierra, la problemática agraria de la entidad se ha complicado debido a otros factores: dotaciones empalmadas, ejecuciones existentes sólo en planos, resoluciones presidenciales sin ejecución.

La solución al problema de la tierra en Chiapas pasa, en consecuencia, por una recomposición de la estructura propietaria, que según Julio Moguel va desde el desahogo del rezago de “obvia resolución”; la simple y llana afectación de todos los latifundios (sin el recurso moroso y burocrático definido en el actual artículo 27 de la Constitución en el que se da a los propietarios —a partir de la notificación correspondiente— el plazo de un año para poner su propiedad “en pública almoneda”); la creación de un fondo de tierras para reasignarla a campesinos y comunidades formado por

¹ Este capítulo se apoya fundamentalmente en las notas de Julio Moguel en torno al problema agrario aparecidas en “Chiapas: la tierra y el poder”, Julio Moguel, Sergio Zermeno, Armando Bartra y Jorge Fernández de Sousa (1995).

la compra gubernamental a particulares, el uso de tierras ociosas y de terrenos nacionales y la expropiación de fincas donde se demuestre que siguen prevaleciendo formas acasilladas de explotación del trabajo; la redefinición de los límites de propiedad establecidos en el actual artículo 27 de la Constitución, particularmente en lo que se refiere a la propiedad ganadera —y de bosques, sin duda, por sólo mencionar lo más grosero de la Carta Magna salinista—, para acabar con el “latifundismo constitucional”, definido por la posibilidad de que un propietario pueda tener el terreno suficiente para “alimentar a 500 cabezas de ganado” y, de paso, tenga el recurso de cambiar el uso de sus tierras —a la actividad agrícola— sin que ello ponga en peligro la dimensión de sus límites propietarios; ensayar un proceso de reordenamiento territorial que, sustentado en la voluntad propia de pueblos y comunidades —lo que supone otra reforma referida a las “autonomías” y al régimen de ordenamiento político en lo municipal—, permita establecer o restablecer una relación adecuada hombre (comunidad)-tierras para efectos de organización social y productiva, y para comprometer a los sujetos sociales y productivos en la perspectiva de un desarrollo sustentable.

La propuesta gubernamental en el diálogo de San Cristóbal, en marzo de 1994, dio un pequeño paso favorable cuando reconoció que “en Chiapas no se realizó a plenitud el proceso de reforma agraria”, y cuando se reconoció la existencia de latifundios. Se avanzó sin duda cuando se habló de la constitución de un “fondo de tierras” para reparto, y de la necesidad de “integrar y proteger el patrimonio familiar en las comunidades”. Se vio actitud negociadora y de propuesta cuando se habló de la urgencia de promulgar una “ley de justicia agraria del estado”, así como de una Ley General de los Derechos de las Comunidades Indígenas. Pero todo pareció ser un contrasentido cuando tales propuestas no fueron acompañadas por la promesa o la idea del cambio constitucional, particularmente en el artículo 27 y en el 4o. (referente a la cuestión indígena), pues ello significaba, en los hechos, que no habría real reforma agraria, que se estaba pensando en asignar sólo —y por el mecanismo burocrático y excluyente— algunos “excedentes”; que el “fondo de tierras” tendría una limitada posibilidad de resolver problemas esenciales. En términos generales, la respuesta ofrecía una salida parcial o marginal a la situación agraria, particularmente al reclamo de tierras de las comunidades indígenas (de Chiapas,

aunque puede tocar a todo el resto del país), ya que si el artículo 27 constitucional permanece en sus actuales términos, las posibilidades de procedimientos dotatorios continuarán cerradas para cualquier grupo campesino, sea éste indígena o no.

Ante problemas tan delicados y demandas tan poderosas contrastan las soluciones que en el año 1994 se emprendieron, plagadas de corruptelas y en el tradicional estilo de hacer promesas dejando que el tiempo, y quizás las escisiones, se encarguen de diluir la identidad colectiva de los demandantes.

La siguiente es una reseña de la forma en que fueron empleados los recursos públicos durante el año 1994 para afrontar el problema:

Sobrepuestos en la compra de tierra, adquisición de predios sin avalúo previo, colusión entre funcionarios de gobierno y pequeños propietarios con el fin de derramar 'comisiones' para los primeros en la compra de propiedades y la venta de ranchos inexistentes, son parte de las irregularidades que han comenzado a aflorar como resultado de la política agraria seguida en 1994.²

Algunas estimaciones ubican que sólo el 10 por ciento de las 38 mil hectáreas de propiedades que se adquirieron como parte de la política seguida se relacionaron directamente con la invasión de predios, mientras el resto —señala la Unión Ganadera de Chiapas— fueron predios que no tenían vínculos directos con la problemática agraria y se basó en criterios de beneficios personales a los adquirentes, así como derrama de "comisiones" hasta de 30 por ciento a funcionarios.³

² Urrutia, Aranda y Rodríguez (1995).

³ "Hay casos extremos: dentro de las 38 mil hectáreas registradas como adquisiciones, está contabilizada la compra del rancho Los Girasoles, que no existe en todo Chiapas... La ocupación de tierras llegó a rebasar las justificadas reivindicaciones agrarias e involucró las autoinvasiones de propietarios que aprovecharon para vender 'ranchos malos a precios de ranchos productivos'... En la lista oficial de adquisiciones aparece una importante cantidad de figuras relevantes durante la administración de Absalón Castellanos como gobernador del estado. Germán Giménez, actual diputado federal, dirigente de los productores de maíz de La Fraylesca y ex líder de la CNC, vendió algunas de sus propiedades en 2 millones 120 mil nuevos pesos, con una extensión de 424 hectáreas, contabilizando dos familias... Roberto Muñoz Liévano, procurador general de Justicia del estado durante el sexenio del general Castellanos, vendió propiedades por valor superior a los 2 millones de nuevos pesos, mientras el ex rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Heberto Morales Constantino, llegó a cotizar la hectárea de su predio ubicado en el municipio de San Cristóbal de las Casas en 70 mil nuevos pesos..." Urrutia *et al.* (1995).

28. MANY MEXICOS

Desde la perspectiva zapatista, se calculó que durante 1994 eran muy bajas las expectativas de llegar a acuerdos de pacificación con un gobierno que se encontraba al término de su mandato. Reforzada por el asesinato de Colosio, la actitud del zapatismo fue de espera, al igual que la de su adversario, pensando que un nuevo régimen, sobre todo si era cardenista, les daría una gran fuerza y legitimidad. Pero incluso si el resultado electoral fuera de un empate, se encontrarían frente a un país plenamente activo y en reacomodo, muy favorable para su consolidación y su articulación con otras fuerzas opositoras. En estas condiciones la *Segunda Declaración de la Selva*, hacia mediados del año (es decir, la negativa total a aceptar los cambios reformistas a través de inversiones Pronasol propuestos por el presidente Salinas mediante su delegado Camacho Solís), no sorprendió a nadie, pero nos permite entender por qué los conflictos, movimientos y luchas sociales en México difícilmente se mantienen en el ámbito en el que nacen, lanzándose inmediatamente al plano de toda la nación. Y es que, al no encontrar *espacios o canales intermedios para hacer política* (lo que supone que la mediación camachista fue sumamente débil y muy mal respaldada por las acciones del presidente de la República), al echar mano del mayor número de alianzas en una búsqueda precipitada por acumular fuerzas, se apuesta a ganarlo todo o a perderlo todo, lo que conduce a desquiciar el orden en un incontrollable encadenamiento de malestares o a destrozarse contra el muro del Estado; y es que, ya lo decíamos, más vale esto que entrar rápidamente en una dinámica de desgaste, de escisiones internas o de aniquilamiento selectivo ejercido por el tlatoani: echa a andar entonces la ya citada lógica del suicida (las luchas sociales y su dirigencia) y el asesino (el Estado), la catástrofe sangrienta de la eliminación de uno u otro. Así, la guerrilla chiapaneca, más allá de la confrontación (que es la característica de toda guerra), se vio empujada a lanzarse a la acumulación de fuerzas a nivel nacional.

El asunto es que el conflicto no pudo circunscribirse a lo *local-indígena* en que lo quiso mantener el gobierno mexicano (una *Ley*

General de las Comunidades Indígenas), sino que pasó irremediablemente a plantearse como un problema *agrario-campesino* y, en esa medida, generalizable a enormes regiones del país (resultó obvio que la táctica de dilación gubernamental, de dejar morir por cansancio, no podía funcionar con una guerrilla y con las elecciones tan cerca). La cuestión es que, con el auge enorme de las invasiones de tierras, pareció que se comenzaba a vivir en el estado de Chiapas una transmutación desde una guerra entre ejércitos (uno en las ciudades mestizas, otro en la Lacandonia), hacia una guerra entre grupos sociales (los propietarios de predios y fincas apoyados por la institucionalidad gubernamental *versus* los invasores indígenas y campesinos de las tierras, apoyados por el zapatismo).

La existencia del ejército zapatista en la selva comenzó a no ser lo más significativo y, para usar una imagen, sus soldados se despojaron del paliacate y el arma larga "trasminándose" desde la selva hacia la lucha agraria. Así, reaparecerían en toda la región, y más allá, en su calidad de campesinos invasores o simplemente de invasores de palacios municipales, desde donde declararían la independencia de los municipios por ellos tomados y la autonomía indígena de esas regiones. Eso es lo que aconteció en la madrugada del 19 de diciembre (19 días después de la toma de posesión del nuevo régimen y nueve días después de que éste, a su vez, le dio posesión, bajo un operativo fuertemente militar, al nuevo gobernador chiapaneco, acusado de fraude electoral): los zapatistas se apoderaron de cerca de cuarenta municipios y con ello pusieron en claro que su movimiento no era esencialmente militar sino esencialmente social y cultural. Menos de 24 horas después, el peso se devaluaba 50%, las reservas nacionales se consumían al tiempo que el capital internacional volaba a otras regiones del globo más estables.

Para el ejército mexicano, sin embargo, esta transmutación sería más costosa, pues aunque al principio del conflicto sus acciones fueron de una elevada violencia contra la población civil indígena, en el nuevo escenario se evidenció su toma de partido por las clases poseedoras, y su complacencia hacia los desalojos violentos de las llamadas guardias blancas.

La estrategia se complicó desde que no fue posible mantener el conflicto en el ámbito indígena-local con invasiones congeladas, organizaciones campesinas divididas, soluciones "pronasolizadas" y un interlocutor acorralado (el EZLN). El "caso de excepción"

(frente al modelo globalizador) en que el gobierno neoliberal quiso convertir al conflicto chiapaneco, no pudo mantenerse circunscrito a una parte del México profundo (los indígenas del atípico estado de Chiapas), y corría el peligro de desbordarse rápidamente no sólo sobre el resto del indigenismo del país, sino sobre el México tradicional campesino (el México maicero). No se trataba más de un "caso de excepción", ya que estaríamos hablando del paso de uno a veinte millones de mexicanos.

El asunto se volvió complejo, en efecto, porque si todos estos mexicanos constituían una excepción, es decir, no podían con el TLC y, además, el país se hundía en la crisis económica debido a la devaluación, el déficit de la balanza de pagos, el desmantelamiento de la industria nacional, el endeudamiento en dólares y la imposibilidad de pagarlos, entonces lo que se ponía en jaque era el modelo mismo de la globalización.

Aquí se antoja un ejercicio de reordenamiento de las dimensiones: el indigenismo que el Estado mexicano quisiera convertir en excepción (sacarlo del libre juego de las fuerzas locales y del libre comercio mediante la prometida *Ley General de las Comunidades Indígenas*), abarcaría un poco menos de un millón de indígenas chiapanecos (el 1% de la población mexicana). El *México profundo*, con fuertes referentes culturales aún anclados de manera orgánica en la tradición indígena, contaría con unos 10 millones de habitantes. Así, el *México tradicional* (I), suma del México profundo más el *México maicero* (el de ese gran campesinado deprimido y sin competitividad), lo compondrían alrededor de 20 millones de compatriotas. En el otro extremo podríamos hablar de un *México transnacional*, aquel que ha sido capaz de conectarse competitivamente con la globalización (restando a los trabajadores de la maquila, de la industria transnacional y de la agricultura de exportación que distan mucho, por sus ingresos, de poder ser considerados como actores legítimos y participativos del país de la población consumista). Estrictamente hablando, se encontrarían enganchados de manera activa al mundo de la globalización uno de cada diez mexicanos. Naturalmente que otro 20% de compatriotas lo constituimos los hijos, que hoy vivimos en peligro, del *México moderno*, el de la etapa sustitutiva de importaciones, el de la industrialización y la urbanización en los decenios que fueron de la segunda guerra mundial a la crisis de los ochenta. Podríamos hablar así de un *México integrado* (III), compuesto por tres de cada diez

mexicanos entre transnacionalizados y modernos; empresarios competitivos y exitosos unos, en el borde de la quiebra la mayoría; estudiantes cuyo esfuerzo formativo es inverso a su futuro laboral; obreros y empleados que sufren pauperización y pérdida de derechos laborales, herencia del pasado; legiones de empleados con salario mínimo, capacitación mínima, organización mínima y escolaridad y cultura mínimas. Entre el 20% del México tradicional y el 30% del México integrado se extiende, con toda su crudeza y su desorden, el *México roto* (II), el desarraigado, el de la modernización salvaje, uno de cada dos mexicanos: los grupos sociales del modelo anterior que nunca fueron integrados por la modernidad y a los que se agregó la pedacería dejada por la "década perdida" y el *shock* neoliberal; las masas de la marginalidad urbana y del mercado informal, a los que hay que agregar los obreros de las maquiladoras y sus desordenadas familias (5% de los mexicanos para el año 2 000); así como a los jornaleros migrantes, a los habitantes de pequeñas y no tan pequeñas ciudades, que ya no son campesinos y para los que casi no hay empleo en esas economías regionales condenadas a no ser competitivas en mercados abiertos, etcétera.

29. CHIAPAS, LO LOCAL Y LO NACIONAL

No cabe duda de que Chiapas ha venido a poner en claro que tan excepcional es el *México profundo* como el *México transnacional*, y que tan iluso es querer convertir el todo hacia un extremo como hacia el otro (nada más a los miembros del equipo neoliberal se les ha ocurrido tal idea, a nadie más). "No creo que el juego del mercado de la oferta y la demanda vaya a resolver los problemas de miseria que existen, por ejemplo, en la Mixteca oaxaqueña. Ahí tiene que haber una política deliberada del gobierno", fueron palabras pronunciadas por Luis Donald Colosio, candidato priista a la presidencia de la República, en el último día de su vida.

Al aceptarse una excepción en Chiapas (o en la Mixteca), que el régimen quiere que sea del 1% pero que en realidad involucra a por lo menos uno de cada dos mexicanos en el estatus de damnificados excepcionales, ya se perfila con evidencia la catástrofe de la utopía neoliberal: ¿cómo diferenciar al México profundo del tradicional-campesino y del México roto? Parece claro que la cuestión chiapaneca nos obliga a repensar el modelo de desarrollo: tratar de ser competitivos en el mundo de la globalidad está muy bien, es más, cuanto más exitosos podamos resultar en ese esquema mejor será (conscientes de los sacrificios que ello acarrea para los obreros y obreras de la maquila, la agromaquila y otros servicios adláteres). De ahí a abrir la frontera inocentemente a los productos agrícolas básicos (maíz, frijol, carne, leche...), a los servicios y a las manufacturas producidas a escala mundial (convirtiendo a nuestros empresarios en fayuqueros o solicitantes de franquicias), hay un paso muy grande si se toma en cuenta, además, que cada vez que hemos resultado competitivos en algún producto, Estados Unidos ha encontrado alguna legislación interna que limite tal éxito (cemento, acero, cerveza, tomate, aguacate, atún, transporte terrestre...). Corea, Japón, Taiwán, Malasia o Filipinas jamás abrieron sus fronteras a la importación de arroz barato de otras latitudes durante su etapa de integración transnacional, y todavía hoy se oponen a desemplear a su nutrido campesinado. Corea y Japón cerraron sus fronteras a manufacturas de mayor competitividad

durante lapsos de tiempo importantes que les permitieron reforzar esos renglones por la vía de la investigación científica en las universidades y en las empresas o, incluso, mandando a científicos a capacitarse en el exterior o trayendo a técnicos altamente capacitados en esas ramas.

Excelente carne traída del extranjero costaba la mitad, antes de la devaluación, con respecto a la carne de calidad moderada producida en Chiapas; el café -hacia el que se orientó durante años la producción de aquel estado pensando en ser exportadores mundiales- no valía la pena ni sembrarlo hacia la época en que se levantaron los zapatistas, por los bajos precios internacionales y la competencia de tantos países en el mundo que producen lo mismo. No queda otra solución en regiones como el sureste mexicano que modernizar lo tradicional, el ejido entre otras cosas, pero respetando y fortaleciendo lo social, es decir, centrando el proyecto en la gente que vive ahí, aunque eso signifique cerrar la frontera a muchos productos de mejor calidad y más baratos. Dar la apariencia de un encierro en el autoconsumo no puede ser descartado si ello permite cubrir una parte estratégica del sustento (maíz y frijol).

Regresamos así al problema del *modelo nacional* de desarrollo y en esa medida a la cuestión del *control del Estado*. En esto, de nuevo, los zapatistas del EZLN no tenían otra posibilidad que plantear desde el principio (*Primera Declaración de la Selva...*), como una cuestión central, el asunto de las elecciones y de la democracia en el país, es decir, el problema nacional-estatal, aunque con ello irremediablemente quedaron inscritos en la dinámica mexicana, la que hace imposible pensar en soluciones "técnicas" circunscritas a la región (en este caso los Altos y las Cañadas chiapanecos): es enorme la inercia que nos empuja hacia los grandes problemas, hacia los temas del modelo global de desarrollo y del tipo de Estado y de régimen que se quiere; dramática resulta la dinámica de las luchas sociales en México y éste es un ejemplo muy claro: surgiendo de lo más enraizado del indigenismo y teniendo como uno de sus objetivos la autonomía de las etnias, entra en una dinámica que la conduce a la acumulación de fuerzas en todo el país, a la lucha contra el Estado, a convertirse en un actor nacional de grandes dimensiones o ser arrinconado, empujado y olvidado en la selva; es la ley de hierro de la mexicanidad: el suicida y el asesino.

30. EZLN: DEL MOVIMIENTO SOCIAL A LA GUERRA DE GUERRILLAS

El día 9 de febrero de 1995, Zedillo tomó la decisión de romper la tregua con el EZLN. Con una cierta perspectiva en el tiempo podemos rearmar los pedazos y entender por qué el presidente tomó esta medida arriesgándose incluso a pagar el costo de la radicalización social (había que ver la furia de los jóvenes al grito de "todos somos Marcos", durante las manifestaciones que sucedieron a esa desafortunada declaración), y destrozando de plano el Acuerdo Político Nacional firmado apenas en enero por todos los partidos para hacer frente a la crisis económica que estalló en diciembre de 1994 y que provocó una devaluación del peso frente al dólar de cerca del cien por ciento. El zedillismo, dijeron Cárdenas y el dirigente perredista Muñoz Ledo en aquellos actos masivos, se desdora como un régimen bipartidista de Estado: PRI-PAN. Y es que el procurador de justicia de la República, quien giró las órdenes de aprehensión contra Marcos y la dirigencia zapatista, es un miembro del partido Acción Nacional a quien Zedillo había invitado sólo 40 días antes a formar parte de su gobierno.

Setenta y dos horas después de giradas esas órdenes de aprehensión, el dispositivo se encontraba perfectamente clarificado: un diálogo y un acuerdo políticos con el zapatismo tal como se encontraban las posiciones militares entre el Ejército Zapatista y el Ejército Federal hasta el 9 de febrero de 1995 no era aceptable para el presidente Zedillo y para las Fuerzas Armadas (y seguramente tampoco lo era para las clases dominantes regionales, el empresariado nacional y las instituciones financieras nacionales e internacionales). Tal acuerdo hubiera implicado reconocer de alguna manera el control por parte de esas fuerzas sobre la mitad del territorio chiapaneco en la que se había promulgado la autonomía de los municipios indígenas y se comenzaba incluso a recaudar impuestos para el gobierno paralelo del candidato perredista a la gubernatura de Chiapas: Amado Avendaño.

En menos de cien horas de rota la tregua la situación cambió radicalmente: ahora el EZLN se encontraba replegado en el interior

de la selva Lacandona, mientras el ejército mexicano estableció su control militarizando los municipios autonomistas. Visto así el operativo pareció constituir un éxito rotundo. Sin embargo el costo no fue bajo de ninguna manera, pues el resultado que se tuvo fue la militarización de una parte del territorio mexicano y el peligro de que esas fuerzas se eternizaran ahí para asegurar que los grupos populares-campesinos-indígenas no pudieran retomar los predios y los palacios municipales. Es decir: el ejército había pasado a ser el garante del *statu quo*.

Como se ha puesto de manifiesto en otros países latinoamericanos, el control militar y la destrucción de las intermediaciones civiles acarrea costos insospechados, al tiempo que aleja la solución en torno a los problemas sociales que dieron pie a dichos levantamientos armados. En efecto, si tomamos los ejemplos de Guatemala y Perú, los otros dos países con indigenismo profundo y guerra campesina, podremos constatar (Kruijt, 1994) que en la persecución de la guerrilla los presidentes fueron convertidos prácticamente en rehenes de sus fuerzas armadas, y terminaron inevitablemente siendo asesorados por intelectuales y políticos del ejército. La sorpresiva elección del presidente Fujimori y la debilidad consecuente de su plan de gobierno, lo convirtieron en huésped del Círculo Militar.

En México, al menos hasta los primeros meses de 1995, no se había establecido una situación de guerra prolongada y la sociedad civil mexicana se mantuvo firme tratando de evitarla. Lo que no ha quedado claro es hasta dónde el gobierno del presidente Zedillo ha intentado con fuerza realmente alejarse de ese escenario. Los días que sucedieron a la ruptura unilateral de la tregua chiapaneca (y sus pretextos infundados), nos pusieron a temblar porque constituyeron *de facto* la entrega del conflicto del sureste a las fuerzas armadas y se acompañaron del desmantelamiento, o del retraimiento al menos, de los actores políticos y de la sociedad civil (comenzando por la Iglesia progresista, a juzgar por los ataques físicos y a través de los medios de comunicación al obispo Samuel Ruiz). Sin estos actores, es impensable la reconciliación y la reconstrucción. En Ayacucho, por ejemplo, la autoridad de las universidades dio paso a los comandos militares, la Iglesia católica a los liderazgos evangélicos atomizados, el sector público y la burocracia regional se desdibujó en fundaciones privadas, los grandes comerciantes en mafias coqueras y los comuneros indígenas se convirtieron en rondas campesinas autoarmadas.

Con los zapatistas arrinconados en la selva y en calidad de delincuentes (debido a la orden de aprehensión que pesó sobre ellos) y con Samuel Ruiz desvirtuado por el gobierno y los medios, no resultaba sincero el llamado del presidente Zedillo a reiniciar las negociaciones de paz, un llamado amplificado por los medios de comunicación, esperando un titubeo en algún punto para mostrar al EZ como renegado y partidario de la violencia.

Si bien es cierto que el ejército mexicano en su avance hacia la Lacandonia no atentó *de manera directa* contra la integridad física de la población civil (aunque existen claras excepciones), lo cierto es que su labor fue la destrucción sistemática de los medios de reproducción material de todas las comunidades sospechosas de simpatizar con el movimiento zapatista (que son la gran mayoría), aquellas de las que huyeron sus habitantes, con excepción de los viejos y algunos niños y mujeres. En esas comunidades fueron destrozados los utensilios domésticos, los aperos de labranza (reatas, sillas de montar, machetes, hachas, limas...), destruidos (no robados) los radios, los hornos para el pan, los molinos y, más importante aún, los granos para la inminente siembra; reventadas las tuberías, vaciados los depósitos de agua (cisternas, ollas tradicionales bajo tierra, cubetas...), etc. Entonces el ejército retiró de los poblados a sus efectivos y su alucinante tecnología bélica, para concentrarse en dos operativos complementarios: por un lado, adelantó sus columnas lo más posible ya dentro de la selva para provocar el repliegue del EZLN, pero sobre todo, como lo hace un exprimidor de limones, para extraer a la población civil que se había refugiado en la selva, a la que vimos regresar, rendida: familias enfermas, exhaustas, moralmente destruidas, atestiguando con rabia, impotencia y llanto apenado la destrucción de todos sus bienes, el fin de la reproducción campesina, la angustia de no poder sostener el ciclo vital en un medio tan adverso, la inminencia de la muerte: "nos chingó el gobierno", decían, personalizando al Ejecutivo, y rechazando las despensas Pronasol.

Junto a esto pudimos atestiguar el repoblamiento de muchas comunidades con contingentes de refugiados que habían abandonado la zona durante el primer año del conflicto y que se consideraban más afines al gobierno, grupos de desplazados totalmente dependientes del sustento gubernamental (al grado de no tener que trabajar): es decir, la creación de "aldeas estratégicas" -como fue denominada esta técnica en Vietnam y en Guatemala- cuya

más reprobable función es la de delatar a los miembros de la comunidad que son sospechosos de ser zapatistas o simpatizantes del zapatismo.

Visto en su conjunto, el operativo tiene como meta el separar a la dirigencia zapatista de la base social del zapatismo; destruir lo que fue un movimiento social, atomizando y desmoralizando a sus bases, separándolas de su inteligentsia (no únicamente militar) arrinconada en la selva. Esto equivale a desmantelar una identidad colectiva plena de fuerza cultural y material, plena de esperanza -y única vía para el tan cacareado "desarrollo autosustentado"- para hacerla tributaria del tlatoani mexicana. Un movimiento social que pide a gritos durante un año que lo reconozcan en su autonomía, que manda señales desesperadas de su alta vocación sociopolítica y cultural (con moñitos blancos en los cañones de los rifles 22), es obligado, por la fuerza de "los ejércitos" del centro, a convertirse en una guerra de guerrillas, de la misma manera en que el Consejo Nacional de Huelga en el 68 fue obligado a convertirse en una cofradía de conspiradores y "delincuentes".

Si el Estado mexicano se hubiera encargado del desarrollo de Estados Unidos durante el siglo XIX, muy probablemente hubiera perseguido a los granjeros hasta quitarles todo, dispersarlos y convertirlos en pordioseros "pronasol". ¿Será que nuestra cultura no puede con la libertad del otro? Si una región no está bajo control de un enviado del centro (un presidente municipal priista chiapaneco, en el ejemplo, organizador de la sumisión y destructor de la identidad colectiva), la soberanía parece estar en peligro. Nuestra soberanía estatal no sabe convivir con la soberanía social. Qué cultura tan perversa y tan cobarde la de este orden político al que no le parece grave hipotecar el petróleo con Estados Unidos durante muchos años o para siempre -como lo han evidenciado los acuerdos internacionales para hacer frente a la crisis de 1995-, pero se aterra y manda tanques y helicópteros artillados para arrebatarse a unos indios la bandera nacional y destrozar sus medios de producción.

31. ¿TAMBIÉN DESDE EL ZAPATISMO?

Desde el zapatismo, ¿no se reproduce también la ley de hierro de la mexicanidad? El movimiento zapatista de los indios chiapanecos tuvo una gran repercusión en la cultura nacional y fuera de México porque era una innovación en varios sentidos: en primer lugar, se trataba de una vanguardia no foquista sino largamente implantada y compenetrada en los pueblos indios, respetuosa de aquella cultura y reconstructora de ella; fue y sigue siendo la imagen de los incluidos al servicio de la exclusión. En segundo lugar habló desde un principio de los asuntos vitales de esos pueblos; definió sus límites frente a la locura globalizadora haciendo estallar la revuelta el 1 de enero de 1994, en la fecha exacta en que entró en vigor el TLC, e inmediatamente puso a discusión el asunto de la autonomía de los pueblos indios.

Es cierto que durante todo ese tiempo no se descuidó la reorganización de los municipios de las Cañadas y la Selva, en donde los zapatistas habían marcado su territorio desde que echó a andar la amnistía, ni se descuidó tampoco la cuestión de la subsistencia e incluso la reeducación en torno a ciertos principios (como la erradicación del consumo de alcohol, por ejemplo). Es cierto, en fin, que el llamado Gobierno en Rebelión (encabezado por Amado Avendaño, candidato perredista derrotado en las elecciones gracias a un fenomenal fraude que no sorprendió a nadie) había reforzado la autonomía de las regiones y los municipios declarados autónomos (aquellos que habían quedado bajo la circunscripción zapatista desde las primeras dos semanas del conflicto). Sin embargo, como dijimos, el zapatismo decidió ampliar su radio de influencia hasta ocupar militarmente casi la mitad de los municipios del estado de Chiapas, hacia el 18 de diciembre de 1994 (lo que se asoció con la devaluación del peso 24 horas después de dicha maniobra).

¿Coincidían estas nuevas fronteras con la identidad sustentable del zapatismo? En un sentido sí, quién lo puede dudar, porque esos municipios, en especial los de los Altos de Chiapas, son abrumadoramente indígenas y profesan gran simpatía por el EZLN y, en algún grado, militan en él. Pero quizás no, desde otra perspec-

tiva, porque el zapatismo excedió los límites de sus fronteras naturales ocupando esos nuevos territorios y permitió justificar, un mes y medio más tarde, la ruptura de la tregua por parte del gobierno a partir del 9 de febrero de 1995 y su avance sobre los territorios autónomos, con el claro objetivo de separar al zapatismo social del zapatismo militar.

Veinte puntos de abasto, Centros de Acción Social, fueron estratégicamente instalados en aquellos municipios que durante el año 1994 fueron zapatistas.

Algunos líderes campesinos de estas regiones, durante una larga época cercanos al zapatismo, y con gran legitimidad entre sus bases sociales, declaraban no poder competir así: "estamos perdiendo a nuestras bases; aquéllos les dan láminas, dinero y despensas, nosotros los convocamos a marchas y plantones". Las organizaciones indígenas y campesinas del estado de Chiapas decidieron, abrumadoramente, el 27 de mayo, entablar negociaciones con el delegado del presidente de México con la esperanza de que a través de sus organizaciones se canalizaran los recursos gubernamentales a la región.

La reacción del zapatismo a esto fue fulminante: firmado por el subcomandante Marcos, en forma de misiva a la prensa nacional, pudimos leer el siguiente mensaje:

Al establecer una negociación paralela a la de San Andrés, el grupo de claudicantes que "dialogan" [con el encargado para canalizar los recursos gubernamentales], respondió con la traición a los anhelos de unidad del pueblo chiapaneco. Se encuentran desanimados por los golpes recientes que hemos sufrido unos y otros... Olvidaron que la victoria es producto de un trabajo de organización, de suma de esfuerzos..."

Los líderes agrarios se lamentaban por este veredicto y se limitaban a repetir que ellos llevaban "veinte años organizando de manera independiente a los campesinos en estas regiones y vamos a vivir y luchar aquí al menos otros tantos años".

Junto a eso, naturalmente se instauró un amedrentamiento permanente hacia los grupos no controlados: el ejército entra directamente a domicilios escogidos y conduce a los jefes de familia a la escuela o a la iglesia para interrogarlos sobre los dirigentes de la comunidad, su pertenencia al zapatismo, el abasto a las tropas en la montaña, exigiéndoles demostrar su distancia con respecto al EZLN al afiliarse a las organizaciones oficiales. No se puede hablar

de maltratos directos y torturas, pero uno puede imaginarse la situación psicológica que conlleva para esas personas y sus familias el quedar señalados de esa manera (de la "guerra de baja intensidad" son parte estas maniobras desmoralizadoras).

De manera que podemos preguntarnos ante este panorama si del lado del zapatismo armado no hay acaso también un regreso a la ley de hierro de la acción social en un país de herencia estatal como es México: por parte de los movilizados la urgencia por acumular fuerzas nacionales para derrotar al Estado nacional: la lógica suicida de destruirlo todo y ocupar ese espacio, o estrellarse contra el muro del autoritarismo; por parte del Estado, el no poder convivir con ningún promontorio, por pequeño que sea, fuera de la pirámide de Aztlán.

¿Cómo no explicitar estos temas si, como decíamos, el zapatismo surgió como un movimiento social cuya fuerza ha estado constituida por su contenido casi ciento por ciento indígena? ¿Cómo no explicitar estos temas si hoy constatamos con angustia que el zapatismo social se vacía, es desconstruido por los brazos del tlatoani y sus organizaciones y dirigencias todavía auténticas, o alguna vez auténticas, son golpeadas por las fuerzas dominantes y por el propio EZLN y esas comunidades se dividen, se confrontan en la inminencia de la guerra fratricida? Es en el referente regional y en la utopía de superar la situación de miseria indígena en donde radica la fuerza y la legitimidad del zapatismo.

En este punto entre lo local-regional y lo nacional se han generado ciertas tensiones entre organizaciones indígenas y campesinas, por un lado, y el EZLN por el otro. Ejemplifiquemos esto con la Consulta (referéndum), de agosto de 1995, por medio de la cual los zapatistas pusieron a la consideración de todos los mexicanos la posibilidad de devenir una fuerza política y hacer pasar a segundo plano su autodefinición como fuerza beligerante.

¿Realmente el pueblo de México nos espera como una fuerza política organizando la lucha a nivel nacional? (se preguntaba el subcomandante Marcos frente a la periodista Carmen Lira, a unas horas de la Consulta). Porque a eso aspiramos, prosigue, a ser una fuerza política nacional, no local... Nuestro trabajo va a terminar en la construcción de ese espacio de nuevas relaciones políticas [*La Jornada*, 25-26 de agosto de 1995].

El resultado de la Consulta, sin embargo, no coincidió exactamente con esta visión general, nacional, de lo que debe ser el za-

patismo: los votantes no quisieron, en un 53% (contra 37%), que el EZ, al abrazar la vía política, se uniera (¿se mezclara?), con el resto de las organizaciones políticas existentes; y algo más revelador: entre la población indígena este sentimiento fue más acentuado (60-30%). Es más, en ciertos poblados fuertemente zapatistas como Patihuitz, la asamblea de ARIC-independiente votó en forma unánime por que el EZLN no se uniera con el resto de las fuerzas políticas. Curiosamente la votación en la asamblea de las ARIC-oficiales, fuertemente controladas por el gobierno, es obvio, votó unánimemente por que sí se uniera al resto de las fuerzas políticas nacionales (Rosa Rojas, *La Jornada*, 7 de septiembre de 1995).

Incluso, en la Asamblea Nacional Indígena (expresión india de la zapatista Convención Nacional Democrática), que tuvo lugar en Oaxaca paralelamente a la Consulta, varios delegados coincidieron en que para el alto mando zapatista "está predominando el diálogo nacional", y manifestaron su extrañeza por el hecho de que el EZLN no haya incluido la demanda del "reconocimiento de los derechos de los pueblos indios" para no decir autonomía, pues agregaban que ese término parece asustar a mucha gente (*La Jornada*, 27 de agosto de 1995).

En varios momentos de este conflicto se ha planteado el asunto de "lo local y lo nacional". ¿Ser local quiere decir perderse en el olvido de las cañadas y la selva lacandona? ¿Ser fuerza nacional quiere decir lo contrario?

El zapatismo surge como una fuerza reivindicativa en torno a la pobreza y la segregación secular, hoy agudizada, de las regiones indígenas de Chiapas: se trata, ya lo apuntábamos, de la reconstrucción de una identidad social y cultural, local y regional, una moral directamente contrapuesta a la locura globalizadora y al oportunismo de las fuerzas políticas de "los integrados". Así lo expresó el propio Marcos en su extraordinario ensayo al inicio del conflicto: "El Sureste entre dos vientos..."

Muchos coincidimos en que desde esta posición el zapatismo construyó su fuerza, y los resultados de la Consulta del domingo 27 de agosto de 1995 nos lo corroboran. Es con base en esta dimensión local-regional convertida, en el extremo, en utopía redentora como se han formado grupos de apoyo al zapatismo en todas partes del mundo: desde lo local-regional, desde las cañadas y la lacandonia, el zapatismo logró una proyección universal (Héctor Díaz-Polanco, 1991; Consuelo Sánchez, 1994).

Pero quizás sucede que el EZLN ha considerado que no hay solución regional si no hay primero solución nacional, que nada se puede desde lo local, que es necesario acumular primero la mayor cantidad de fuerzas inconformes para, así, aunque sea por la vía electoral, derrotar al gobierno, a su partido, al neoliberalismo y a las fuerzas dominantes que hoy son transnacionales. Cómo no respetar esa idea y, sin embargo, cómo no recordar que con esa lógica se han perdido la casi totalidad de las luchas sociales de la historia posrevolucionaria de México.

Nos dice Marcos en su comunicado del día de la Consulta:

El ¡ya basta! se multiplica... el ridículo golpe a los trabajadores de Ruta 100 [red de autobuses de la ciudad de México], puso a la dignidad obrera en las calles; la sordera a los reclamos democráticos del pueblo tabasqueño provocó que el Éxodo de la Dignidad del Sureste se hermanara con el del centro; el cobarde asesinato de los campesinos guerrerenses, veracruzanos e hidalguenses tendió un puente de sangre morena hasta los indígenas chiapanecos; la militarización de la capital del país recordó a los capitalinos que tienen derecho a ser ciudadanos... La complicidad gubernamental (con la banca) generó un amplio movimiento ciudadano (de deudores), El Barzón, que se resiste a ser despojado de todo lo logrado con su trabajo y esfuerzo... [*La Jornada*, 27 de julio de 1995].

Ojalá tenga razón Marcos y que toda esa acumulación de males se conjugue para lograr un cambio hacia la democracia y no hacia el desorden total o hacia la militarización de México. En septiembre de 1968 también veíamos acumularse de nuestro lado a todos los mexicanos: Topilejo y los campesinos, los ferrocarrileros de Pantaco y la clase obrera... El cambio no se produjo, perdimos la universidad, la dirigencia del movimiento fue encarcelada o muerta y las demandas gestionadas por el propio gobierno. Algo así percibimos cuando el EZLN se brincó, el 18 de diciembre, las líneas del ejército sobre las que estaba establecida la tregua. Seis semanas más tarde fue tomado todo su territorio y arrinconada su dirigencia en la selva.

Si de veras, como dice la dirigencia zapatista, la sociedad civil "tiene que participar, si no perdemos todos", entonces es indispensable recomponer el terreno para esa participación. Como lo establecieron en su reciente balance de San Cristóbal las ONG que trabajan directamente en Chiapas (Conpaz), y también los proyectos de la Universidad Autónoma Metropolitana dirigidos a esa re-

gión, lo más urgente es recrear el espacio civil en los Altos, las Cañadas y la Selva; lo primero es reconstruir la cohesión social de esas comunidades divididas y hasta enfrentadas, establecer zonas civiles en expansión, replegar a los 50 mil efectivos del ejército mexicano y su maquinaria infernal, reincorporar y disolver el zapatismo militar en el zapatismo social.

Sólo así tiene sentido el trabajo de la sociedad civil (y también de los organismos internacionales, las iglesias, las CEB, las reivindicadas organizaciones indígenas y campesinas independientes), en su manifestación concreta de organizaciones de salud, de abasto, de atracción de recursos, de educación, de derechos humanos, de apoyo a la niñez y a la mujer, etc. Sólo a partir de este trabajo arduo sobre el terreno local es como puede comenzar a plantearse el problema medular de asegurar la sustentabilidad del desarrollo con base en la reconstrucción de la identidad colectiva. Estas tareas, al ser local-regionales, producen un discurso universal altamente audible en toda la nación y más allá. Pero es indispensable que el liderazgo zapatista regrese a sus bases y las dirija, que reconstituya ahí el orden y la identidad. Creo que eso entendimos muchos al votar por que "pasaran a ser fuerza política". Sería pavoroso ver enfrascado al zapatismo en una asamblea nacional de oratoria interminable y de rebatinga por las curules.

Cómo no traer a la discusión el hecho de que ha habido otras soluciones en nuestro país y en el plano internacional, recordar, por ejemplo, que los trabajadores del astillero de Dansk en Polonia, desde la exigencia de solución para lo local, fueron capaces de sembrar un ejemplo que al ser copiado poco a poco por otras localidades terminó por derrotar al estado burocrático nacional polaco y, algo mucho más férreo incluso que nuestro decadente tlatoani, de sembrar las bases para la derrota del más poderoso Estado del orbe y su partido: el imperio soviético. En lo nacional tenemos registro de otros casos, *raras avis in terris*, es cierto, como el Comité de Defensa Popular (CDP) de Durango; o la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI) en Juchitán, Oaxaca. Movimientos con más de veinte años de existencia que han sido capaces, por su poder regional, indígena, cultural, de mantener históricamente a raya al Estado central y, en los días presentes, de administrar el Pronasol ellos mismos, de resolver muchos problemas locales, de convertir calles polvorientas, verdaderos chiqueros, en algo más saludable, sin que el objetivo fuera alcanzar un desarrollo

ciego, transnacional, supeditado a los ritmos frenéticos de la ciencia y la tecnología. ¿Cómo darle organicidad a lo que se desorganiza? Los ejemplos de Durango, del Centro Histórico de la Ciudad de México y el terremoto, de Juchitán... son una esperanza a este respecto. Y sin embargo inmediatamente aparece la duda de si no es una mera ilusión el oponer esta imagen de reconstrucción comunitaria a las fuerzas del control empeñadas en mantener a los excluidos, y hasta a los integrados, en la atomización, la desorganización, la inconciencia. Veamos algunos ejemplos.

33. LA CUARTA DECLARACIÓN DE LA SELVA Y EL FUTURO DE LA OPOSICIÓN EN MÉXICO

La *Cuarta Declaración de la Selva* convocó, a inicios de 1996, a

la creación de un amplio frente opositor organizado local, estatal y regionalmente [...] que crezca desde la base, desde los comités civiles, movimientos y grupos [...] cuyos integrantes no desempeñen ni aspiren a desempeñar cargos de elección popular o puestos gubernamentales [...] no aspire a la toma del poder [...] y sea de oposición auténtica al gobierno y al partido de Estado.

No cabe duda de que la característica del zapatismo ha sido, desde su origen mismo, la sorpresa y la renovación. Este llamado del EZLN a la creación de un Frente Zapatista de Liberación Nacional, junto con la carrera por la sucesión de las dirigencias perredista y panista, de cara a las elecciones de 1997, tuvieron el efecto de poner a pensar a todo el país en torno a lo que debería ser hoy, y en el futuro, la oposición en México.

No había concluido el mes de enero y ya 269 organizaciones con 1 500 delegados de 22 estados del país se habían reunido en Acapulco, creando un "Frente Amplio para la Constitución del Movimiento para la Liberación Nacional", que según declararon sería "incluyente, flexible, que incorpore a organizaciones sociales, políticas, ciudadanas, pero también a ciudadanos individuales", tratando de evitar una pesada estructura burocrática. A inicios de marzo, en Poza Rica, Veracruz, se reunieron representantes de alrededor de 70 comités civiles zapatistas para discutir a fondo cuáles debían ser las características del FZLN. En el grupo tres (Organizaciones Sociales y Participación Ciudadana) de la mesa sobre Justicia y Democracia de los diálogos para la paz en Larráinzar y San Cristóbal, presentaron sus puntos de vista y hablaron sobre las perspectivas de un Amplio Frente Opositor y sobre el contenido de la *Cuarta declaración de la Selva*, asesores e invitados del EZLN representando el Frente Cívico Potosino, el Frente Auténtico del Trabajo, el Comité de Unidad de Tepoztlán, el Movimiento Xi Nich, el Movimiento "Todos por Chihuahua", la Asamblea de Barrios,

las Experiencias de Organización Social de Jalisco, los Comités Civiles de Michoacán, el Movimiento Proletario Independiente-Ruta 100, la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo, la Región Mazateca de Oaxaca, el perredismo social de Tabasco, el Sindicato de Electricistas, la Nación Purépecha, etc. El 14 de abril en Juchitán, Oaxaca, durante la Tercera Reunión Nacional del Movimiento Urbano Popular se acordó la integración de una comisión promotora para la creación de un Amplio Frente Opositor.

Los zapatistas aclararon un poco después de lanzada la convocatoria que no había que mezclar dos propuestas: por un lado, el Frente Zapatista para la Liberación Nacional es el mecanismo por medio del cual el zapatismo se propone acatar los resultados del referéndum de 1995 en el que se le indicaba convertirse en una fuerza política; al FZLN se afiliarían ciudadanos individualmente y no organizaciones sociales o políticas ni partidos; la forma de participación sería a través de los Comités Civiles de Diálogo que enviarían sus solicitudes de registro a través de oficinas geográficamente distribuidas en la república para ser aprobadas por un comité formado por la oficialidad zapatista.

Al lado de esto se proponía, tanto por el EZLN como por otras organizaciones, la creación de un Amplio Frente Opositor en el que los zapatistas participarían como una más entre las otras tantas organizaciones sociales y políticas.

Que cada quien interponga las reservas que guste, pero un hecho es ineludible: el zapatismo hacia mediados de 1996 había desarrollado una alta capacidad de convocatoria que parecía redundar en constelaciones organizativas cada vez menos efímeras, mejor autocontenidas y auto-críticas, más vueltas a lo social y menos conspirativas. Ahora bien, todo ello se ha dado en medio de un mar de malestares sociales y en un escenario de empleo sistemático de los instrumentos coercitivos: digamos que ejército y policías, con distintos uniformes o sin ellos, se estaban haciendo cargo ya sistemáticamente de las agrupaciones de compatriotas que cometen el "delito" de organizarse para hacer frente a su desdichada existencia y a las decisiones superiores que los afectan.

Todo esto quiere decir que, seamos o no simpatizantes de estas formas de hacer política, los elementos están dados para que iniciativas de rearticulación de lo social-popular proliferen (¿la sociedad se organiza en medio del caos y la represión?). El hecho es que están acudiendo a este nuevo ensayo de constelación social-

popular consejos municipales en rebeldía, regiones autónomas, sindicatos intervenidos, privatizados y en resistencia, coordinadoras estatales de maestros, uniones de vendedores, frentes amplios estatales, movimientos populares urbanos, estudiantes en defensa de la educación pública y gratuita, coordinadoras contra la desnacionalización de empresas estratégicas...

¿Alcanzará finalmente consistencia y continuidad un llamado como éste o reproducirá a la Babel de la Convención Nacional Democrática en sus sesiones extenuantes en pleito por integrar el politburó histórico (definitivo)? ¿Estaremos pasando en estas amplísimas convergencias de la "Ideología Soviet Supremo" y la hiperverbalización a la práctica dirigida a buscar soluciones para que la gente viva mejor cotidianamente y tenga más control sobre su entorno regional, local, vecinal? Quién sabe, pero nuestros movimientos y organizaciones populares están haciendo ensayos y, aunque aún se vea lejano, flota en el ambiente la urgencia de un cambio de cultura política que da sus primeros pasos, no hay que subestimarlos, con la aceptación de la propuesta intuitiva del FZLN de no ocupar puestos de representación y puestos gubernamentales ¿Qué tal si a fuerza de ensayo y error nuevas prácticas políticas echan a andar donde la academia, los políticos de salón y las teorías del individualismo y el *rational choice* no ven sino masas manipulables y autoritarismo potencial?

Sea como fuere, resulta inocente pensar que este intento de rearticulación social-popular (tanto del FZ como del Amplio Frente Opositor), podría encontrar un espacio favorable para ensayar un cambio de cultura política, si ya resulta obvio que el modelo globalizador, cuya aplicación ortodoxa en México ha sido calificada de salvaje, exige para su funcionamiento, de manera cada vez más agresiva, el desmantelamiento inmisericorde de todos aquellos promontorios o tejidos duros que en lo social se atreven a resistir la empresa de los grandes aparatos de poder mundial y nacional y de sus huestes mercenarias de intelectuales, medios de comunicación, magistrados, militares, policías, guardias blancas, caciques del partido de Estado, cándidos estudiantes de Harvard y de Yale que terminan integrando las lujosas listas de Forbes y de Almoloya... ¿Cómo se incentivan las potencialidades concertadoras y la cultura de la interacción comunicativa racional, cuando todos los intentos organizativos de la sociedad civil en el primer año de la presidencia zedillista han sido perseguidos y se cuentan por cientos los presos

políticos y por decenas los muertos (300 perredistas en los noventa)?

¿Cómo podemos exigirles a estos movimientos hacer política en nuevos términos si cuando logran organizarse con fuerza y legítimamente, como ha sido el caso del perredismo en Tabasco, se les impide gobernar y para ello se recurre a fraudes electorales multimillonarios? ¿Cómo cambiar de cultura política cuando se demuestra con documentos la magnitud del fraude y no pasa nada?

No, el neoliberalismo salvaje y ortodoxo tiene dos limitantes que impiden el tránsito a la democracia: primero, que en el grado de descomposición en que hoy se encuentra (desnuda dominación de clase), el proyecto neoliberal está obligado a dismantlar las organizaciones, movimientos e identidades colectivas que lo resisten; ya no puede cooptarlas (no tiene recursos más que para pagar la deuda), y lo vemos sustituir aceleradamente a Sedesol por Sedena. Segundo: que a diferencia de los tan traídos y llevados ejemplos sudamericanos, centroeuropeos y mediterráneos de tránsito a la democracia, en nuestro caso la fuerza autoritaria que debería pasar a una posición secundaria para dar lugar a un nuevo pacto de civilidad no sólo no se encuentra en retirada (como fue el caso del pinochetismo, el franquismo o la burocracia polaca), sino que permanece en el centro de la escena, es la dueña de la fiesta, del pastel, de los cohetes y de los sacaborrachos... y es, aun, algo más: es una fuerza dependiente de los grandes intereses nacionales y, en primer lugar, transnacionales que en su tarea de ordenar los recursos del país para su entrega a nuestros acreedores mundiales, en lugar de concertar en los conflictos se constituye en la fuente de éstos, se convierte en un agente en tránsito al autoritarismo (cibernético y legaloide donde aún puede, descarnadamente golpear donde ya no). Esto quiere decir que el actual régimen neoliberal dependiente de nuestro país está incapacitado para convocar a una alianza con la población que dice gobernar, a un pacto entre gobernantes y gobernados para hacer frente a la impresionante crisis de futuro por la que atraviesa nuestro país y que amenaza con extenderse por largas épocas.

Para la oposición, particularmente la que asienta sus bases en organizaciones, identidades y movilizaciones sociales fuertemente populares, como ha sido el caso del cardenismo y el perredismo, la tensión que esto genera es insoportable: en enero de 1995, como veíamos, mientras la corriente perredista negociadora firmaba con Zedillo, el ya mencionado "Pacto de Unidad con Todos los Mexi-

canos", grupos paramilitares y priistas desalojaban el plantón perredista contra el fraude electoral y bloqueaban la producción de más de 40 pozos petroleros decretando a Tabasco "territorio en resistencia". Al mismo tiempo pusieron en evidencia, qué duda cabe, que no los obligarían a aceptar la impunidad electoral, por más acuerdos que la dirigencia perredista lograra en los salones de negociación de la capital. "Ninguna acción relevante que se emprenda en nombre del PRD -declaraba inmediatamente Porfirio Muñoz Ledo- debe hacerse sin consultar a los órganos estatutarios."

No nada más entre la alta cúpula concertadora y los movimientos sociales que son objeto de la ingeniería dismanteladora se genera esta tensión insoportable; también en situaciones más restringidas: el Comité de Unidad de los Tepoztecos, como dijimos, después de destituir al cabildo con amplio apoyo de su comunidad, se lanzó a la lucha contra la construcción de un gigantesco club de golf residencial. El gobierno del estado y la Comisión Electoral ordenaron que se llevaran a cabo elecciones extraordinarias en la situación de cacería en la que se encontraban los dirigentes del CUT. Como si eso no importara, la fracción perredista en el Congreso de Morelos declaraba, increíblemente: "No se avizoran tranquilas las elecciones... por la represión contra el CUT, pero nosotros vamos a exigir que estos comicios sean limpios, transparentes y ejemplares, como nunca ha sucedido en Morelos... se efectuarán bajo un clima político idóneo" (*La Jornada*, 21 de enero de 1995).

Como veíamos, no se quiere, en infinidad de lugares, que los conflictos se diriman vía elecciones extraordinarias, porque se sabe que las comunidades pueden ser divididas y confrontadas entre sí.

Increíblemente el PAN, que surgió como un partido social, también ligado a organizaciones y movimientos sociales históricos, principalmente en el Bajío, en Puebla, en Yucatán (y en las grandes ciudades de los cuarenta), no está hoy sometido a una tensión semejante a la descrita, a pesar de las penurias y las vicisitudes por las que atraviesan sus potenciales y sus reales electores. Por ejemplo, la situación desesperada de los 500 mil deudores barzonistas por alguna razón se encuentra desligada y no ha sido asumida por el panismo, siendo que la correlación entre barzonistas y votantes panistas debe de ser muy alta. Muchos teóricos y partidarios de la transición pactada dicen que esto es lo correcto, que las organizaciones partidistas y las movilizaciones sociales mantengan una cierta distancia.

Ya el politólogo Guillermo O'Donnell ha llamado la atención sobre los peligros de una "democracia delegativa" (o delegada en representantes casi autónomos). Y es que esto puede generar una gran polaridad, una separación casi esquizofrénica entre una lógica electoral y de influencia de los políticos y una lógica de la acción social; aparecen entonces los comicios como un acto sin conexión con los problemas de la vida cotidiana, sobre todo entre las capas más desposeídas y desorganizadas de la población. No quiere decir que el PAN no hable de los marginados, de los pobres, de las profundas desigualdades sociales y del "humanismo universal", sino que lo hace con un discurso cada vez más global y general, no ligado a este o a aquel movimiento o lucha social viva, del presente. La dirigencia barzonista puede ser apresada y los barzonistas pueden estar siendo embargados sin que el PAN exponga sus banderas en la defensa de estas injusticias (entre otras cosas, claro está, porque el procurador general de la República es panista y su responsabilidad es enorme en la proliferación de los encarcelamientos de dirigentes sociales).

Y es que a pesar de que Felipe Calderón, quien ha sido asociado con el panismo tradicional, triunfara en marzo último al ocupar la presidencia del partido, lo cierto es que ese viejo PAN, llamado "doctrinario", ligado a las regiones (del Centro) y a su historia, ha dado paso a uno de administradores, cada vez más despojado de referentes morales y religiosos, con una base segura entre los sectores llamados de centro, modernos, individualistas (otrora) consumistas: "los bárbaros del norte", fue apodada esta corriente. Y es que estar ligado a los conflictos reales conduce casi inevitablemente a la confrontación (sobre todo en este neoliberalismo tardío y autoritario), y eso asusta a un sector importante del electorado conservador, que coincide bien con una masa de mexicanos muy desentrenados en la crítica y en el ejercicio de sus derechos y cada vez peor informados debido al monopolio de la comunicación.

Agreguemos otro elemento para entender este desempeño *cool* del panismo (a distancia de las identidades sociales vivas): todos los partidos políticos tienden a adoptar cada vez más un lenguaje centrista, porque ante la crisis de militancia, la desideologización y el descrédito de los partidos y los políticos (sobre todo en esta putrefacción mexicana), las clientelas cautivas y doctrinarias tienden a ser pequeñas y, en consecuencia, muy amplias las masas sin adscripción partidaria y sin posiciones definidas y elaboradas; ante

ellas, el discurso simple -a equidistancia de los extremos calientes y de las acciones controvertidas- más bien centrado en imágenes carismáticas, en historias personalizadas y en ágiles verbalizaciones tipo cápsula televisiva, reditúa en votos que, por lo demás, comprometen muy poco al partido que los recibe con los ciudadanos que los emiten.

Muchos analistas consideran, no sin razón, que el PAN está mejor preparado y en mejor posición que el PRD para ganar esos votos, de mantenerse a distancia de los puntos calientes de cualquier imagen relacionada con la violencia y conservando el perfil pragmático de sus objetivos en torno, por ejemplo, de la seguridad ciudadana, la erradicación de la corrupción gubernamental, etc. (la "transición sin ruptura", robándole el término a Camacho Solís). Sin embargo, también es cierto que en un país tan convulsionado por la crisis que el neoliberalismo sembró (lo que no quiere decir fortaleza de la sociedad civil sino sobre todo desorden, desidentidad y anomia sociales), y tomando en cuenta que el PAN se revela como un defensor aún más ortodoxo del modelo neoliberal, privatizador y aperturista, resulta completamente correcto afirmar que, conforme este partido vaya ejerciendo el poder, su desgaste puede ser muy acelerado. A ello se agrega su desprecio hacia las estructuras tradicionales del orden social y político, así como hacia las formas basistas y defensivas generadas por la crisis, y su temor, en fin, de activar la participación ciudadana proponiendo formas nuevas de organización social. A pesar de ello, el PAN, en su evolución paulatina frente (o junto) al PRI, cuenta con un margen de tiempo holgado y a su favor y con ello contribuye a actualizar la cultura autoritaria. Así pues, si el desorden social no degenera en violencia manifiesta, el PAN cuenta con un periodo de gracia altamente estratégico, a pesar de su desgaste en la defensa empecinada del modelo neoliberal y en el ejercicio de un poder que se revela, desde ya, como un destructor de las identidades ciudadanas y de las resistencias sociales a la empresa del neoliberalismo salvaje.

¿Quiere todo esto decir que la única salida para construir una verdadera oposición en favor de la dignidad y el mejoramiento de la "calidad de la vida" de los amplios sectores, es organizando algo parecido a un frente social-popular al margen de la vida partidista y parlamentaria y al margen de las mesas de concertación de la Reforma Política? ¿Un amplio frente opositor desde la base, parafraseando a la *Cuarta Declaración* zapatista, cuyos miembros estén

ligados orgánicamente con sus bases sociales y en el extremo no desempeñen ni aspiren a desempeñar cargos de elección o de gobierno?

Éste ha sido un asunto de gran controversia a partir del llamamiento zapatista. Y es que, en efecto, para muchas organizaciones ha sido poco comprensible el asunto de la renuncia zapatista a los puestos de representación y de gobierno. ¿Por qué una organización tan bien asentada en su cultura y en su sociedad, como ha sido la COCEI en el istmo de Tehuantepec, tendría que estar de acuerdo en que la recreación de una nueva cultura política se lograría mejor abandonando sus posiciones de gobierno, posiciones con ya cerca de quince años en el cabildo de Juchitán y de otros municipios hermanos, si justamente el acceder a estos puestos les ha permitido, entre otras cosas, la recreación y el fortalecimiento de su identidad cultural, social y política así como el manejo, de manera bastante *autónoma*, de importantes presupuestos públicos (sobre todo en la época de Pronasol), con los que pudieron resolver con alguna eficacia una serie de necesidades colectivas?

Lo mismo podría decirse del Comité de Defensa Popular (CDP) de Durango, con 25 años de asentamiento en colonias populares y que se encuentra hoy en su segundo periodo al frente del cabildo de aquella ciudad. Y qué decir de la lucha del perredismo tabasqueño por la gubernatura, que ha tenido la fuerza de unir al pueblo de aquella entidad en un movimiento con consistencia organizativa y continuidad en la defensa de los recursos naturales, contra el ecocidio petrolero, por los derechos electorales, etc. El navismo en San Luis Potosí, la Asamblea de Barrios en el D.F., los municipios en rebeldía de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Morelos vendrían a completar una lista de ejemplos en el mismo sentido; es decir, son ejemplos en donde la vanguardia política, que ocupa o aspira a ocupar posiciones de representación o gubernamentales, se encuentra perfectamente relacionada con un movimiento social con asombrosa continuidad en el tiempo: en estos ejemplos, movimiento social y representación política mantienen una organicidad.

Sin embargo, en México, hay que aceptarlo, éstos son garbanzos de a libra. Por lo regular nuestra matriz de acción social nos muestra que las luchas colectivas, después de un inicio bastante radical, pierden cohesión y consistencia y el Estado acaba dividiéndolas fácilmente por cooptación de una parte de su dirigencia, por represión, o por simple cansancio. Una acción política termina opo-

niéndose a una acción social en su seno, y los dirigentes acaban ocupando posiciones políticas de influencia, ante el resentimiento de unas bases sociales que caen en el desánimo mientras la identidad colectiva se desvanece.

De manera que cuando se dice ¡No a los puestos de elección o a los puestos gubernamentales!, se está hablando de algo muy profundo en la historia de nuestro país. No se trata, sin más ni más, de calibrar la frase con los textos de teoría política universal ni con la historia de otras sociedades, como lo ha hecho con la *Cuarta Declaración de la Selva* el grupo *Vuelta* y el grupo *Nexos*. Se está hablando de algo mucho más complejo y apenas develado intuitivamente, se habla de modificar la matriz de funcionamiento de los mexicanos. El razonar a fondo este asunto podría implicar, o conducir, al menos, hacia un cambio fundamental de nuestros valores políticos.

En la relación actual entre Estado y sociedad en México, coinciden y se refuerzan, por un lado, el viejo principio de nuestro autoritarismo consistente en no aceptar la presencia de ningún promontorio (pueblos, culturas o movimientos sociales) fuera del orden piramidal coronado por el tlatoani y, por otro lado, la urgencia de nuestro neoliberalismo tardío y autoritario de destruir aceleradamente cualquier organización de la sociedad, cualquier núcleo duro o tejido resistente que pueda oponerse a la globalización, es decir: al ejercicio de la dominación mediante la violencia por parte de un poderosísimo puñado de agentes de la técnica y el capital, así como de los ejércitos civiles y militares, domésticos y transnacionales a su servicio.

Ante este panorama, ¿cómo hablar de tránsito a la democracia si no están dadas las condiciones para establecer una relación fluida y sana entre política y sociedad, entre acción política y acción social; si no existe ruptura alguna con lo más vertical de nuestra herencia sino más bien su reforzamiento, el paso a primer plano de la seguridad (trans) nacional: policías, militares, guardias blancas, fortalecidos ante la protesta social pero también fortalecidos por el llamado desesperado de la ciudadanía para que sea perseguida la delincuencia, la corrupción, la anomia, para que sea restablecido un orden?

¿Es esto lo que sucedió en Europa o en América del Sur? En estos casos, como decíamos, el agente autoritario había sido desplazado del centro del poder pero, más importante aún, todas las

fuerzas del país estaban de acuerdo en que lo que debía fortalecerse a partir de ese momento era la primacía de los órdenes, los espacios, las asociaciones, las instituciones y los agentes capaces de "generar ciudadanía".

Retomemos aquí algunas ideas ya explicitadas: es importante poner un alto a la interpretación simplista de que la transición hacia regímenes democráticos en los países del Este, en los mediterráneos y en los de América del Sur consistió en un pacto entre poderosas fuerzas políticas y de élite llevado a cabo en espacios cerrados, más o menos al margen de la activación popular y ciudadana, como parece sugerirlo la imagen ya mencionada hasta el cansancio de los pactos de la Moncloa, en España. Ahí, "las élites políticas acertaron no tanto porque dirigieran al público cuanto porque supieron aprender de él" (Pérez Díaz, 1993): lo que despejó al rey el camino para nombrar a Suárez fue la agitación popular de la primavera de 1976, un clima de crisis que condujo al gran referéndum de diciembre (sí: referéndum); luego vinieron los partidos y el fortalecimiento de la vida electoral. Pero es fundamental tener claro que en ese país, antes, durante y después de los acuerdos en las alturas políticas, se desarrollaron vigorosas asociaciones ciudadanas en forma de áreas de convivencia, focos ciudadanos, asociaciones vecinales, centros cívicos, escuelas de participación ciudadana, asociaciones de contribuyentes, radios municipales independientes, asambleas democráticas, asociaciones juveniles, de mujeres, de ancianos, etcétera.

Se trató en general de la creación de un Tercer Sector abocado a tapar los huecos (boquetones, habría que decir en México), dejados por la economía de mercado y por la administración pública; focos ciudadanos intermedios que tuvieron su momento de mayor vigor entre el fin del franquismo y los años ochenta y que trabajaron paralelamente (a veces coordinados y a veces confrontados), con las autoridades de sus Ayuntamientos, *rehusándose en la mayoría de los casos a acceder a los puestos de gobierno* a cuyos ocupantes criticaban y reorientaban en asuntos tan diversos como la intervención en planes urbanísticos, la vivienda (caso de los chabolistas de Madrid que construyeron 400 viviendas en siete años), los medios de comunicación (exigencia de trenes en contra del uso indiscriminado del automóvil alrededor de las grandes ciudades), la ecología (limpieza de barrios y de zonas turísticas para elevar sus ingresos como trabajo pagado por el presupuesto público), la ocupación de cuar-

teles y edificios públicos sin función con el fin de crear centros educativos, juveniles, de ancianos, culturales, para atender la drogadicción, el alcoholismo, con personal pagado con el dinero de sus impuestos, etcétera.

Fue así como se logró sacar a los ayuntamientos a la calle, recuperar los valores ciudadanos, recomponer y refundar las dimensiones de los colectivos, sus fronteras territoriales, culturales, productivas, de servicios... (como dice el madrileño Tomás Villasante, 1995); en una palabra, reencontrar sus identidades colectivas sustentables. Con éxitos y fracasos, con altas y con bajas, la participación social fue la constante en la España de la reconstrucción ciudadana y electoral, desde Cataluña hasta Andalucía, desde Galicia hasta Valencia. Y no se trata de un ejemplo extremo, lo mismo podría argumentarse de la enorme activación de las comunidades cristianas en el fin del pinochetismo, y ni qué decir de la Polonia de Solidaridad.

Miembros y líderes de estos movimientos ganaron luego elecciones de alto nivel en sus países y regiones, pero ese fue el resultado de un trabajo que primero se basó en la reconstrucción de la sociedad y no en un acuerdo precipitado bajo los techos de un edificio histórico, mientras el régimen con quien se pretende llegar a tal acuerdo se caracteriza por el desmantelamiento cotidiano (digamos de tres turnos), de las identidades colectivas, desde las indígenas hasta las sindicales, las barriales, las universitarias, las de defensa de los deudores, las instituciones de salud y de abasto, las de la reconstrucción municipal, etcétera.

En ese contexto tiene sentido lo establecido en la *Cuarta Declaración de la Selva Lacandona*, porque debido a nuestra historia de país ante todo estatal y muy poco social, los mexicanos tendemos, en cualquier situación, hacia el vértice de la pirámide, hacia los puestos de influencia y de poder, tanto en la cultura del PRI como en las organizaciones de izquierda. No suena mal la creación de un frente o un amplio movimiento opositor que se proponga la reeducación de los mexicanos en el seno de la acción ciudadana, desalentando la ocupación inmediata de puestos de adulación y de reverencia, campo tan propicio para la cooptación de liderazgos y el debilitamiento consecuente de redes convivenciales.

Por lo demás, cuando la lucha partidista se desata sin bases electorales formadas en procesos sociales consistentes, tiende a convertirse en lucha de líderes efímeros (sobre todo con los presu-

puestos millonarios que el partido de Estado suele invertir en las contiendas difíciles), lo que termina por dividir a las comunidades, barrios y municipios. En esos casos, es mejor buscar las candidaturas únicas con apoyos fuertes de organizaciones ciudadanas y populares o las elecciones por la vía de usos y costumbres. Ya vendrá el momento de elegir a los grandes líderes nacionales y regionales, por lo pronto tiene razón el EZLN cuando dice: "si el quehacer político tiene como objetivo la toma del poder, qué va a pasar con el quehacer político si cambiamos esa premisa. Lo que queremos demostrar es que, si viéramos de otra forma el poder político podríamos producir otra forma de hacer política". En torno a esto, Julio Moguel escribe:

Una nueva relación entre los gobernantes y los gobernados no debe operar sólo sobre las formas de articulación de unos y otros sino en los interiores de estos continentes... los segundos tienen que (re)aprender a mandar. El factor primario y dinámico de la ecuación es, hoy por hoy, el que los gobernados aprendan y construyan sus formas e instrumentos de mandato (construidos en mucho por la autoconciencia que es, en este caso, reapropiación de valores esenciales, construcción de identidades colectivas y, por ello, de poder); la variable dependiente es -también hoy por hoy- que los gobernantes aprendan a mandar obedeciendo [*La Jornada*, 5 de febrero de 1996].

Las malas experiencias de organizaciones anteriores han dejado huella. Un objetivo sería superar ese parlamento de aspirantes a la dominación en que, en algunos momentos, se convirtió la Convención Nacional Democrática en 1994 o el Consejo Nacional de Huelga en 1968 y tantas otras organizaciones. Es infinito lo que ha avanzado el EZLN desde el 1 de enero de 1994, pero no podría decirse lo mismo de su adversario que no sabe más que de desalojos y desmantelamiento de comunidades, declaraciones de mala fe para romper el avance en las negociaciones, etcétera.

Todo esto no quiere decir que tenga que haber una plena compenetración entre autoridades y organizaciones sociales en cada caso. Es más, lo regular, por lo menos en experiencias como la española, para retomar el ejemplo, es constatar un enfrentamiento constante entre cabildos y organizaciones ciudadanas, aunque también una compenetración al final de esta dinámica. Pero, claro está, en España, particularmente en los años de la apertura, no existía entre Estado y sociedad una guerra casi declarada, una ten-

sión insoportable que hiciera añicos a las fuerzas y partidos políticos. Incluso en la actualidad, el derechista (recolocado en el centro) Partido Popular, sabía que no podría ganar las elecciones si su plataforma no hubiera tomado en cuenta los intereses de las organizaciones sindicales democráticas y con alto poder de convocatoria como Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores.

¿Quiere todo ello decir que podrían quedar al margen del Amplio Frente Opositor y de las organizaciones políticas que sigan la orientación descrita, todas aquellas corrientes concertadoras y los intelectuales, personalidades e individuos que no estén incrustados en una organización social definida? Por supuesto que no: los esfuerzos concertadores en la Mesa de la Reforma Política y Electoral llevados adelante por un partido como el PRD o una de sus corrientes, independientemente de la forma en que pudieran articularse en un Amplio Frente Opositor para la Liberación Nacional (o como se llamara un ensayo de este tipo), son indispensables, deben estar ahí, construyendo propuestas y consensos. Pero una línea de acción tal, como la "transición pactada", por las razones descritas no debería erigirse como la línea correcta o la línea privilegiada de un amplio frente social-popular. Simplemente no puede ir por su lado porque el orientador fundamental de la acción no es la ocupación de los espacios de poder, así sea a través de las elecciones más limpias del mundo, sino la reconstrucción del poder social, de las identidades colectivas para el desarrollo sustentable (que no es, necesariamente, la búsqueda de la frontera tecnológica, ni de ningún tipo de acumulación), sino el equilibrio con la naturaleza, la concordia, la recreación de una cultura que fortalezca la identidad, la salud...

El ala concertadora, negociadora, verbalizadora, parlamentaria, intelectual, legislativa de un frente nacional opositor al Estado clasista y transnacional y a su partido, debe entrar y salir de la negociación según lo exija el objetivo central antes descrito.

Nos enfrentamos aquí a un problema: el de la dirección del propio Frente Zapatista de Liberación Nacional y el de la dirección del Amplio Frente Opositor. Esto reproduce en otro nivel, aunque ahora en el interior de la organización misma, el asunto de los puestos de representación, de autoridad y de gobierno.

Comencemos por lo primero: el FZLN ha anunciado, ya lo decíamos, que su organización estará constituida por Comités Civiles

de Diálogo que serán conformados por mexicanos "sin partido", afiliados individualmente, y que el reconocimiento de dichos comités será hecho por la oficialidad zapatista. Los zapatistas están en todo su derecho de buscar un espacio intermedio entre su organización militar actual y el otro extremo: una vía en donde la sociedad simplemente se autoorganiza, sin centralidad, sin jerarquías ni verticalidad, a la manera, por dar una imagen, de las juntas de vecinos en un espacio urbano. No se trata naturalmente de diluirse y desaparecer en el inmenso mar de la sociedad, pero en el polo opuesto es pertinente preguntarle a los zapatistas si la imagen de una organización que, para empezar, se llama *zapatista* (FZLN), y que ofrece como su órgano de decisión más elevado un comité constituido por una vanguardia militar (por más que lo militar sea casi nulo en la imagen de los comandantes zapatistas), tendrá la fuerza para convocar a la proliferación de comités u organizaciones de base ciudadanos, civiles, barriales, vecinales, universitarios, de artistas, etcétera. Quizás sí pero, francamente, se dibujan algunas dudas. Quizás el comité ciudadano de diálogo que pudieran formar este o aquel grupo de ciudadanos, no debería estar obligado a registrarse ante el EZLN. En ese caso, el zapatismo debería convocar a la formación de comités civiles de diálogo y sólo aquellos que tuvieran interés de trabajar directamente para la causa zapatista (entendida como apoyo directo a un movimiento social que se desarrolla desde 1994 en los Altos y las Cañadas) debieran buscar su reconocimiento formal por el EZLN. Sin embargo al zapatismo lo entendemos muchos como un movimiento que no se restringe a lo local-regional, sino que constituye una propuesta de reconstrucción moral para infinidad de espacios sociales de nuestro país e, incluso, que ha logrado proyectar mundialmente una imagen ejemplar.

Siendo así, el FZLN ganaría mucho renunciando a la idea de que una pequeña comisión militarizada se encuentre al frente de las constancias de pertenencia y de los carnets. La dirigencia zapatista debe formar parte de ese comité promotor, naturalmente, pero quizás debería aparecer al lado del grupo de mexicanos que desde lo civil ("desde la sociedad civil", les gusta decir a los zapatistas), han sabido acompañar ese conflicto, su delicado proceso y la desactivación de la guerra (muchos de ellos nombrados asesores e invitados para los diálogos de paz). Innumerables Comités Civiles de Diálogo tendrán interés en quedar enmarcados en la organiza-

ción zapatista, adoptando incluso el nombre CCD Emiliano Zapata, o Rubén Jaramillo..., pero otros podrían no quedar directamente dentro del paraguas del Ejército Zapatista e incluso actuar, ahí donde éste tenga posiciones de mando y autoridad, como contrapeso del zapatismo, a la manera en que las juntas vecinales españolas sirvieron de contrapeso y reorientación de las decisiones de los cabildos socialistas: "ya no hagamos más anfiteatros para la política en este pueblo, ahora destinemos esos recursos a sembrar árboles frutales y hortalizas, acondicionemos un criadero de truchas..."; quizás ese núcleo decida autonombrarse Comité Civil de Diálogo "La Utopía Sustentable", Región Autónoma de La Realidad, o vaya usted a saber.

No es posible eludir tampoco el tema de la relación entre organizaciones y dirigencia en lo que hace a la idea de un Amplio Frente Opositor. Lejos de la imagen vertical de un partido leninista, lo cierto es que cualquier organización, incluyendo las organizaciones políticas construidas en función de electorados ciudadanos modernos y autodenominadas "centristas" como el propio PAN, el Partido Socialista Francés o el Partido Popular español, contienen un liderazgo y una disciplina interior que les permite ordenar la entrada y la salida de sus líneas negociadoras en este o aquel punto, dependiendo de su estrategia general; y les permite hacer posible, igualmente (regresando a nuestro país), el entrar y salir a un bloqueo de los pozos petroleros, por ejemplo, según lo requiere esa misma estrategia general.

Ahora bien, tratándose de un Amplio Frente Opositor social-popular y en una sociedad como la nuestra en la época actual, el problema del liderazgo y de la disciplina se convierte en un tema ineludible: en un país con el dinamismo que experimentó México hasta los años ochenta, que cambió a su población del campo a las ciudades en pocos decenios (con el descontrol demográfico y el salvaje crecimiento urbano que ello implica), que ha caído en un estancamiento económico total en los últimos años, con el desmantelamiento industrial y agrícola y con el desorden socioocupacional desatado por las políticas neoliberales ante el desaprovechamiento monstruoso de su mano de obra (sobre todo de los jóvenes), con la proliferación de la miseria, el abatimiento de los niveles de escolaridad y de salud, y el aumento exponencial de la violencia y la delincuencia; en una palabra, en un país que se halla en medio de la degeneración creciente de su orden social, se requieren or-

ganizaciones sociales y políticas y un principio de autoridad y liderazgo bastante bien definidos (se postulan como oposición o como gobierno).

Decir que cada integrante de una amplia alianza popular debe actuar libremente según sus iniciativas, buscando con ello dar una imagen de gran flexibilidad, constituye un discurso pseudodemocrático en la lógica electorera de ganar los votos del centro, para lo que otros partidos o agrupaciones políticas como el PAN o el Amplio Frente Camachista, podrían estar mucho mejor preparados. Constituye algo así como sembrar el desorden en medio del caos.

Cuauhtémoc Cárdenas, en contra de toda lógica y en contra de lo que indicaba su ascenso meteórico como liderazgo personalizado en 1988, hizo en 1994 una campaña de búsqueda del voto ciudadano, con un discurso democrático genérico, tratando de desdibujar incluso su personalidad carismática de mando, sin dejar sentir que sus órdenes eran obedecidas por un andamiaje organizativo eficaz. Su fraudulento adversario Salinas de Gortari había gobernado, precisamente, echando mano del liderazgo personalizado y del verticalismo, como lo habían hecho y lo harían sus homólogos Alan García y Fujimori en ese Perú también profundamente mestizo, y como lo haría Menem en Argentina y lo intentaría Carlos Andrés Pérez, Collor de Mello y tantos otros (llama la atención en esto la grisura de Zedillo pero, claro está, atado a la ortodoxia neoliberal cualquier protagonismo podría conducirlo a la tragedia de Carlos Andrés en Venezuela).

Entendamos entonces una cosa: la urgencia de reordenamiento y de liderazgo no es una solución en sí misma, pues esta figura puede ser construida, justamente, con base en una empresa desmanteladora de las identidades sociales (con el destacadísimo ejemplo de Salinas). Muy lejos de esto, el reto es cómo construir instituciones, organismos y liderazgos cuya fortaleza sea el producto, precisamente, del largo trabajo de reconstrucción de los órdenes sociales; cómo hacer que ambos se fortalezcan en su dialéctica, siempre difícil. Eso implicaría una verdadera transición social a la democracia.

Todos quisiéramos que México estuviera efectuando este tránsito sin la intervención de ningún agente externo partidista, lideril o estatal, gracias a una sociedad civil fuerte en sus organizaciones intermedias, y que esto fuera producto de la sola dinámica de la modernización; un orden que facilitara el engrandecimiento de la

personalidad de cada individuo, la interacción en el más alto nivel de racionalidad y que cultivara, como ya decíamos, unas instituciones estables tanto en lo social como en el plano de las representaciones políticas. Pero no nos estamos acercando ni a una democracia asentada en una sociedad civil ni a una con predominio de la sociedad política (partidos, parlamentos o grandes fuerzas corporativas), sino a un desorden social generalizado.

Parece oportuno, en fin, apartar la idea de acumulación de fuerzas bajo una dirección unificada. Esa imagen de que un frente o una amplia alianza opositora tendrá éxito en la medida en que pueda colocar bajo su cobijo (y entonces bajo su disciplina) a la casi totalidad de las fuerzas sociales, populares o democráticas. Es obvio que muchos mexicanos, organizados o dispersos, no quieren estar bajo el paraguas de un frente que se llame "zapatista", de "liberación nacional" o, simplemente, "frente amplio opositor" de vocación popular (es decir, ligado a los amplios sectores menos favorecidos de la población), incluso si la gran mayoría de los mexicanos estuvieran a favor de una reconstrucción de las identidades sociales. Criticar al panismo cupular y "concertacionista" no hace desaparecer al caudal de mexicanos de los grandes centros poblacionales, moderno, en muchos casos católico, del viejo y del nuevo norte (y de los conglomerados del centro y del sur), que se encuentra en el núcleo de la definición de ciudadanía en nuestro país. Si un organismo como Alianza Cívica ha encontrado una respuesta masiva entre los mexicanos a pesar de la ingeniería desmanteladora, es porque ha apelado a este universo ciudadano medio moderno, medio consumista, medio católico, medio ilusionado por el sueño norteamericano (aunque cada vez menos). También en esta tonalidad se encuentra, aunque en los acordes altos, más bien políticos (ocupación y conducción del Estado), el Frente Amplio propuesto por Camacho Solís y el llamado grupo San Ángel; un frente capaz de agrupar a sectores provenientes del propio priismo, del panismo (como los foristas, quizás), e incluso del perredismo, ya que la sucesión en la dirigencia de este partido favoreció a la corriente más claramente social-popular, más cercana a los movimientos sociales, y no tanto a la corriente concertadora. No tiene nada de alarmante que los reacomodos políticos conduzcan en México a un mapa menos abigarrado y pluriclasista de las organizaciones políticas que heredamos de la etapa popular-nacional y de la larga vida del PRI: 1] una constelación social-popular con

sus manifestaciones y organizaciones tanto en la sociedad civil como en la política (cada plano con su autonomía y su distancia, con un PRD, por ejemplo, más preocupado por la reconstrucción social que por las concertaciones); 2] una constelación democrático-ciudadana más propia de organizaciones como Alianza Cívica en lo social y, naturalmente, el PAN en lo político (aunque compitiendo claramente por manifestaciones como el camachismo si el aparato panista no se deslinda de su fascinación por el modelo neoliberal y si insiste en mantenerse tan distante de las luchas sociales, ya no digamos populares sino incluso las de los sectores integrados); 3] un PRI en descomposición, aunque muy peligroso porque antes de morir parece estar dispuesto a convertirse en la careta "civil" de un orden autoritario y policiaco.

De la buena comprensión de estas diferencias, de estas expresiones plurales (exceptuada la última), de la inteligencia y el respeto de las organizaciones hacia esos planos, de la firmeza y el proyecto de cada liderazgo dependerá la posibilidad de que algunas de estas condensaciones, a veces más sociales, a veces más políticas, amplíen su influencia y su base de sustentación a expensas de las otras.

Pero no perdamos de vista la importancia del llamado al cambio de nuestra cultura política; ahí se encuentra lo más sugerente de las declaraciones de nuestro tiempo, y no sólo de las que vienen de la selva: decía a inicios de 1996 Enrique Calderón, uno de los miembros de la dirección colegiada de Alianza Cívica:

Lo que constituye la esencia política de Alianza Cívica y fortalece su credibilidad y autoridad moral es que se trata de un movimiento ciudadano incluyente, plural, democrático, que no aspira a obtener puestos de gobierno ni a competir electoralmente, pero sí a exigir a los gobernantes y representantes el cumplimiento estricto de sus compromisos y a orientar sus acciones de acuerdo con la voluntad de las mayorías [*La Jornada*, 3 de febrero de 1996].

Es importante romper cuanto antes la esquizofrenia entre, por un lado, corrientes negociadoras, centristas y del tránsito pactado y, por otro, corrientes radicales, antielectorales y relacionadas con la violencia; se debe restablecer esa polémica en términos de acuerdos horizontales de fuerzas preocupadas, cada una en sus espacios, por el reforzamiento de las identidades sociales, hermanar hasta donde sea posible manifestaciones populares y ciudadanas y no fomentar su confrontación: no hay un perredismo radical violento

enfrentado a un panismo electoral racional. Plantear así las cosas es reproducir la matriz gastada de la mexicanidad: nada más la pirámide es legítima, aunque ahora se pinte de azul; afuera de ella sólo hay promontorios ilegítimos, arrasables.